

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 21º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-24650-2019  
CARATULADO : CATALÁN/FISCO DE CHILE

Santiago, ocho de Marzo de dos mil veintitrés

VISTOS:

Comparece doña Paz Becerra Urzúa, abogada, domiciliada en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins N° 252, oficina 42, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, en representación de **WALDO CATALÁN BARRIOS**, cédula de identidad número 4.818.666-1, pensionado, divorciado, **LEONARDO MORALES MORALES**, cédula de identidad número 4.874.630-6, pensionado, casado; **HUGO EUSEBIO GARCÍA CASTRO**, cédula de identidad número 8.743.366-8, pensionado, casado, **NELSON RAMÓN FLORES PACHECO**, cédula de identidad número 10.737.511-2, pensionado, casado, **JORGE CALVO HERRERA**, cédula de identidad número 4.172.733-0, pensionado, casado, todos de su mismo domicilio, e interpone demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario, en contra del **FISCO DE CHILE**, persona jurídica de derecho público, Rol Único Tributario N° 61.806.000-4, representado legalmente por la Presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, cédula de Identidad número 6.274.313-1, domiciliada en Agustinas N° 1687, comuna y ciudad de Santiago.

Funda su acción, y luego de señalar el contexto en que se dieron los hechos que pasa a relatar, relacionados al quiebre institucional producido el 11 de septiembre de 1973, en el relato de los acontecimientos de que fueron víctimas sus representados, y que motivan la demanda:



Foja: 1

Respecto de don WALDO CATALÁN BARRIOS, indica que en la actualidad tiene 57 años de edad, y que fue detenido el día 13 de septiembre de 1973 en su trabajo en la industria enlozados de Fensa en la comuna de Maipú, Santiago, por personal de Carabineros y de Militares. Ese día eran unos 300 trabajadores que cumplían sus funciones y que llegaron los militares del regimiento Guardia Vieja Los Andes, ingresando al lugar violentamente, disparando para todos lados, allanando el lugar y deteniendo a un grupo de trabajadores. Incluso menciona que había un helicóptero sobrevolando el lugar con gran contingente de carabineros. Narra que los hicieron ponerse en el suelo con las manos en la nuca y los golpearon brutalmente. Luego los hicieron ponerse de pie y los subieron a los vehículos militares, llevándolo al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional. Fue en este último lugar donde estuvo detenido 5 días y después de eso comenzaron a someterlo a torturas físicas y psicológicas, obligándolo a desnudarse en un camarín, y señalándole que era prisionero de guerra, lo golpeaban con pies puños y objetos contundentes. Producto de la tortura le fracturaron el dedo meñique de la mano derecha y el pulgar de la mano izquierda, también le quebraron la clavícula izquierda. Se mantuvo por varios días parado a la intemperie, no le permitían realizar sus necesidades fisiológicas, y sin alimento durante 3 días, y cuando le dieron de comer lo tenía que hacer con las manos. Narra que un día lo sacaron del camarín para hacer un simulacro de fusilamiento por un estrecho pasillo donde vio que torturaban a las mujeres, haciéndolo caminar por arriba de aquellas mientras ellos las abusaban. Fue sometido a un consejo de guerra quedando en libertad los primeros días de noviembre de 1973 sin cargo alguno en su contra. Durante su detención en el estadio fue atendido por el hospital de campaña debido a las fracturas en la clavícula y en sus manos. Indica que el tiempo total que estuvo detenido fue un mes y 17 días, de los cuales estuvo cinco días incomunicado. Cabe precisar que su nombre figura en el libro de Manuel Contreras, como un terrorista. Plantea que el daño psicológico causado permanece hasta el día de hoy, teniendo en la actualidad pesadillas, recuerdos vivos de la tortura y terror a ser sometido nuevamente a esos vejámenes. Asevera que nunca he recibido tratamiento psicológico y padece de crisis nerviosas recurrentemente, siempre relacionadas con la rabia y la



**Foja: 1**

frustración de haber vivido esa terrible experiencia. Además, fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas”, en el anexo elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, del año 2004, siendo su registro como víctima el N°5307.

En cuanto a don LEONARDO MORALES MORALES, expone que es un ex detenido y torturado durante el golpe de estado, y que fue detenido el día 8 de enero de 1974, en calle San José 1936, Población San José, Arica. Se encontraba durmiendo con su señora y sus hijos, llegando una patrulla de militares y allanando su casa, destrozando los sillones, las cosas que había en el dormitorio y la bodega. Los insultaron, preguntaban por armas y panfletos del partido comunista, porque él pertenecía al cordón industrial de los dirigentes. Lo sacaron con fuerza y golpes desde la casa, lo subieron a un camión militar, percatándose que no era el único detenido, había muchas más personas en el camión. Los llevaron al cuartel número 2 de Rancagua, en esa época estaba ubicado en Calle Santa María con Diego portales, ahí lo golpearon e insultaron. Recibió golpes en el estómago, le hicieron un corte en la cabeza, en el brazo izquierdo, le pegaban con un chorro de goma. Explica que quedó con secuelas en el oído medio, y tiene problemas hasta el día de hoy para caminar bien. En ese cuartel militar estuvo detenido seis días. Después lo trasladaron al cuartel de Rancagua ubicado en Calle Velázquez con Juan Antonio Ríos, y que ahí lo interrogaron los miembros de una comisión de civiles que pertenecía al ejército. En el período que estuvo ahí que fueron cuatro días le hacían declarar auto inculpándose de hacer sabotajes con explosivos en los postes de alumbrado público. Posteriormente, el 20 de enero de 1974 lo trasladaron en Jeep a la cárcel pública ubicada en calle Baquedano número 1, llevándolo a un pabellón con otros compañeros que estaban presos. Después de 28 días lo dejaron en libertad por no encontrar pruebas que lo inculparan. Refiere que lo más terrible de todo es el daño causado, por cuanto quedó con daños en su oído medio que le repercuten en la vida cotidiana, todo esto a causa de los salvajes golpes que le propinaban los militares. Aproximadamente estuvo 40 días detenido en manos de militares



Foja: 1

de manera injusta. Agrega que fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas”, en el anexo elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, del año 2004, registrándose como víctima con el N° 15753.

Con relación a don HUGO EUSEBIO GARCÍA CASTRO, detalla que lo tomaron detenido en el año 1988 funcionarios de carabineros de Chile, teniendo aproximadamente unos 26 años de edad, llevándolo a la Cárcel de Arica y desde ahí los militares lo sacaron a la Fiscalía Militar varias veces, lugar en que lo sometieron a violentos interrogatorios, sobre armas, militantes, cualquier cosa, porque el tema era amedrentarlos. Sostiene que siempre lo amenazaban de muerte, que iban a matar a miembros de su familia, de modo que el susto era inmenso. Los maltratos eran constantes y el tiempo que permaneció detenido es el período más oscuro de su vida, era todo muy insalubre. En total estuve detenido ocho días. Además, fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas”, en el anexo elaborado por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Valech II, siendo registrado como víctima bajo el N° 3396.

Referente a don NELSON FLORES PACHECO, describe que el 25 de septiembre de 1985 era estudiante de enseñanza media; y que saliendo de su domicilio fue interceptado por un vehículo particular y dos personas lo tomaron por la fuerza y lo subieron a un vehículo; se trataban de funcionarios de Carabineros de Chile. Lo atemorizaron, lo golpearon en la cabeza y en el cuerpo diciéndole que tenía que dejar de molestar porque si no, lo iban a matar. Luego lo llevaron a una comisaría que se trataba de la Tercera Comisaría de la comuna de Santiago, luego lo trasladaron a la Primera Comisaría de Santiago en calle Santo Domingo. Lo mantuvieron incomunicado, lo maltrataron físicamente con torturas consistentes en golpes



Foja: 1

de puño y pies, lo acusaron por la Ley de Seguridad del Estado. Sostiene que su detención fue publicada en el diario La últimas Noticias el 1 de octubre de 1985. Lo liberaron con fecha 3 de octubre de 1985, y hasta la actualidad mantiene mucho resentimiento contra carabineros porque era un estudiante en esa época, se desactivó políticamente, y eso le provocó mucha frustración. Además, fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la “Nómina de prisioneros políticos y torturados”, en el anexo elaborado por omisión Asesora para la Calificación de Detenidos/as Desaparecidos/as, Ejecutados/as Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II, siendo su registro como víctima el N° 3104.

Finalmente, sobre don JORGE CALVO HERRERA, expresa que éste estuvo detenido dos días, lo golpearon y lo maltrataron mucho por lo que no tiene muchos recuerdos, en ese momento ni siquiera sabía dónde estuvo esos dos días, después se enteró que en un centro de detención clandestino en la ciudad de Arica y que lo habían tomado detenido los militares. Después lo llevaron al Regimiento de Rancagua, ese lugar lo pude reconocer. Ahí estuve durante 11 días. Lo golpeaban constantemente, por eso hoy tiene problemas en sus oídos. También le pegaban culatazos y lo amenazaban de muerte. Además, fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, que fueron individualizados en la “Nómina de prisioneros políticos y torturados”, en la Nómina de personas reconocidas en etapa de reconsideración de la Comisión Valech, siendo su registro como víctima el N° 169.

A continuación, la apoderada de los actores menciona que los autores de estos hechos son agentes del Estado, que formaban parte del Ejército de Chile, Carabineros de Chile y Policías de Investigaciones, que organizados, desarrollaron una política criminal al amparo de un régimen político dictatorial, cuyo origen ilegítimo se produce en el contexto de un golpe de estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973, todos los agentes que participaban de las sesiones de tortura tenían la calidad de funcionarios



Foja: 1

públicos o agentes del Estado en cuanto eran miembros de las Fuerzas Armadas. En virtud de esta condición cabe responsabilidad civil al Estado de Chile. Existe responsabilidad extracontractual que tiene origen en un hecho ilícito, a raíz del cual se ha originado un daño, existiendo relación de causalidad entre la acción del funcionario público y el daño producido. La acción civil tiene su origen en un delito de lesa humanidad y por eso tiene un carácter humanitario. La Ley de Bases Generales de la Administración señala que el Estado será responsable por los daños que causaren los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado.

En cuanto al derecho, invoca como fundamento normativo los artículos 38 inciso 2°, artículo 1 inciso 4°, artículo 5 inciso 2°, artículos 6 y 7, artículo 19 N° 1, 4, 24 y 26, todos de la Constitución Política de la República; artículo 4 de la Ley N° 18.575; artículo 24 del Código Civil, artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, artículos 1, 3 y 5 de la la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 1°, 14, y en general, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los artículos 3 y 149 de los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los Principios de Núremberg, el artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y normas de *ius cogens* relativas a crímenes internacionales.

Pide tener por interpuesta acción civil de indemnización de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por la presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, todos ya individualizados, acogerla tramitación, y en definitiva, acogerla en todas sus partes, disponiendo: 1.- Condenar expresamente al Estado de Chile a pagar a cada uno de los



**Foja: 1**

demandantes a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de \$100.000.000.-, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma, o la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad, al mérito de autos; y, 2.- Que en todo evento se condene expresa y ejemplarmente al demandado al pago de las costas de la causa.

Con fecha 13 de septiembre de 2019, consta la **contestación** de parte del **FISCO DE CHILE**, representada por doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, quien luego de hacer un breve resumen de la demanda y las pretensiones allí consignadas, controvierte los hechos e interpone las excepciones y defensas, que a continuación se exponen.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, afirmando la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

En término generales explica la demandada, que asumida la idea reparatoria por parte del Estado en lo que respecta a la justicia transicional, ha sido mediante la dictación de las leyes N°19.123 y N°19.992 que se establecieron mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, realizando principalmente tres tipos de compensaciones: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas (pensión Ley N°19.234, pensión anual establecida por la Ley N°19.992 y Aporte Único de Reparación Ley N°20.874, por \$1.000.000; gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda); y c) reparaciones simbólicas (establecimiento de Memoriales y Museos referentes a la Memoria y Derechos Humanos, entre otros).

Con lo dicho, afirma que estas reparaciones al igual que las indemnizaciones que se solicitan tienen como objetivo compensar los



**Foja: 1**

mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños alegados por el demandante, no pudiendo, por ello, ser compensados nuevamente. En tal sentido sostiene que el fallo “Domic Bezic, Maja y otros, con Fisco”, rol Corte 4753-2001, ha sido especialmente claro cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues “aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”. Esto último fue ratificado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, donde se reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismo hechos resolviendo que: “DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: “Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”. De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se





**Foja: 1**

desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización. Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiese gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien -como se dijo-percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos”.

Luego, opone la excepción de prescripción extintiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo código, solicitando que se rechacen las acciones resarcitorias en todas sus partes por encontrarse éstas prescritas.

Expresa que conforme al relato efectuado por los actores, los hechos por los cuales accionan habrían ocurrido en las siguientes fechas: 1) Don Waldo Catalán Barrios, señala haber sido detenido el día 13 de septiembre de 1973, por el periodo de un mes y 7 días; 2) Don Leonardo Morales Morales, señala haber sido detenido el día 08 de enero de 1974 por un periodo de 40 días; 3) Don Hugo Eusebio García Castro, señala haber sido detenido en fecha indeterminada del año 1988 y por el lapso de 8 días; 4) Nelson Ramón Flores Pacheco, señala haber sido detenido el día 25 de septiembre de 1985 hasta el día 03 de octubre de 1985; y don 5) Don Jorge Calvo Herrera, señala haber sido detenido en fecha y año indeterminada por 13 días. Con ello, y aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por



Foja: 1

imposibilidad de las propias víctimas o de sus familias de ejercer las acciones correspondientes, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 28 de agosto de 2019, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que exige la Ley.

En subsidio, opone la excepción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, ambos del Código Civil.

Explica en términos generales sobre la prescripción, que cuando no se ha establecido la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible (Alessandri, Somarriva y Vodanovic. *Tratado de Las Obligaciones*. Editorial Jurídica de Chile. 2ª Ed. 2004. Volumen III. p. 181), por lo que no existiendo una norma específica sobre la materia en nuestra legislación interna, ya que las normas de derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, solo se referirían a la acción penal mas no a los efectos patrimoniales.

En subsidio de las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de la acción deducida, solicita que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que los cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral, ya que de no accederse a esta petición subsidiaria implicar a un doble pago por un mismo hecho.

Finalmente, hace presente la improcedencia del pago de reajustes e intereses por cuanto éstos, mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, no hay obligación de indemnizar del Fisco; en consecuencia, no podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.



Foja: 1

Con fecha 07 de octubre de 2019, la parte demandante evacuó el trámite de la **réplica**, reiterando los fundamentos expuestos en su libelo de demanda solicitando el rechazo de todas y cada una de las excepciones, defensas y alegaciones opuestas por la demanda por parte del Fisco de Chile en su escrito de contestación. Alega la improcedencia de la excepción de pago pues el principio general es la reparación integral del daño de acuerdo a lo expuesto en la demanda, así, las normas que enuncia el demandado, en el mejor de los casos, sólo establecen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos de tortura de que fueron víctimas las personas. Respecto de la excepción de prescripción, sostiene su improcedencia en atención a que el estatuto legal aplicable al caso concreto, sobre la base de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por nuestro país en los términos del artículo 5 inciso 2° de la Carta Fundamental y de las normas vigentes no pueden ser simplemente aquel aplicable a los negocios y relaciones jurídicas entre los particulares, cuestión que no se ve alterada por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia. En cuanto al monto demandado hace presente que la defensa fiscal cuestiona el monto en atención a lo difícil que resulta en estos casos avaluar este tipo de perjuicios que por definición son de naturaleza contractual. Sin embargo, la normativa vigente exige presentar peticiones concretas.

Con fecha 24 de octubre de 2019, consta el trámite de la **dúplica**, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en su escrito de contestación, en especial a las excepciones de reparación integral y prescripción.

Con fecha 06 de noviembre de 2019, se dictó la **interlocutoria de prueba**, por el término legal, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 22 de septiembre de 2020, se tuvo por aprobada **TRANSACCIÓN** suscrita por los demandantes don JORGE CALVO HERRERA y don HUGO EUSEBIO GARCÍA CASTRO con FISCO DE CHILE, dando por finalizada la controversia civil surgida entre estas



Foja: 1

respecto a la indemnización de perjuicios demandada en autos por los referidos actores, cuya resolución se encuentra firme y ejecutoriada con fecha 07 de octubre de 2020, quedando vigente las acciones relativas a los demandantes don WALDO CATALÁN BARRIOS, don LEONARDO MORALES MORALES, y don NELSON RAMÓN FLORES PACHECO.

Con fecha 16 de agosto de 2022, se citó a las partes a **oír sentencia**.

### CONSIDERANDO:

**PRIMERO.-** Que, comparece doña Paz Becerra Urzúa, abogada, en representación de **WALDO CATALÁN BARRIOS**, de **LEONARDO MORALES MORALES**, de **HUGO EUSEBIO GARCÍA CASTRO**; de **NELSON RAMÓN FLORES PACHECO**, de **JORGE CALVO HERRERA**, todos ya individualizados, solicitando tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario en contra del **FISCO DE CHILE**, representado por la presidente del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, todos ya individualizados, y en definitiva, acogerla en todas sus partes, disponiendo:

- 1.- Condenar expresamente al Estado de Chile a pagar a cada uno de los demandantes a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido causado por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de \$100.000.000.-, más reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor, e intereses que la cantidad devengue desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de la misma; y,
- 2.- Que en todo evento se condene expresa y ejemplarmente al demandado al pago de las costas de la causa.

**SEGUNDO.-** Que, con fecha 13 de septiembre de 2019, el **FISCO DE CHILE**, contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido, fundándose para ello en los antecedentes de hecho y derecho que ya han sido reseñados en la parte expositiva de la sentencia, los cuales se dan por enteramente reproducidos en este motivo.



Foja: 1

**TERCERO.-** Que, con fecha 07 de octubre de 2019, se evacuó el trámite de la réplica, en la que se reiteraron los argumentos de la demanda y se efectuaron algunas precisiones en cuanto a las excepciones, alegaciones y defensas planteadas por la parte demandada.

**CUARTO.-** Que, con fecha 24 de octubre de 2019, se evacuó el trámite de la dúplica, en la que se reiteraron los argumentos de la contestación.

**QUINTO.-** Que, con fecha 22 de septiembre de 2020, se tuvo por aprobada **TRANSACCIÓN** suscrita por dos de los demandantes, estos son, **JORGE CALVO HERRERA** y **HUGO EUSEBIO GARCÍA CASTRO** con **FISCO DE CHILE**, dando por finalizada la controversia civil surgida entre estas respecto a la indemnización de perjuicios demandada en autos por los referidos actores, cuya resolución se encuentra firme y ejecutoriada con fecha 07 de octubre de 2020, quedando vigente las acciones relativas a los demandantes don **WALDO CATALÁN BARRIOS**, don **LEONARDO MORALES MORALES**, y don **NELSON RAMÓN FLORES PACHECO**.

**SEXTO.-** Que, la parte demandante con el objeto de probar los fundamentos de su demanda, rindió la siguiente prueba instrumental:

1.- Copia digitalizada de Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que certifica que don Nelson Ramón Flores Pacheco, cédula de identidad N°10.737.511, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la denominada Comisión Valech II, individualizada en el N°3104;

2.- Copia digitalizada de Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que certifica que don Leonardo Morales Morales, cédula de identidad N°4.874.630-6, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la denominada Comisión Valech I, individualizada en el N° 15.753;

3.- Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos que certifica que don Waldo Catalán Barríos, cédula de identidad N° 4.818.666-1, se encuentra calificada como víctima en el listado de



Foja: 1

prisioneros políticos y torturados, elaborado por la denominada Comisión Valech I, individualizada en el N°5307;

4.- Copia digitalizada de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech II, por don Nelson Ramón Flores Pacheco, cédula de identidad N°10.737.511, debidamente autorizado por ministro de fe del INDH;

5.- Copia digitalizada de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Leonardo Morales Morales, cédula de identidad N°4.874.630-6, autorizado por ministro de fe del INDH;

6. Copia digitalizada de Carpeta de Antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por don Waldo Catalán Barríos, cédula de identidad N°4.818.666-1, debidamente autorizado por ministro de fe del INDH;

7.- Certificado N° 44, del Servicio de Salud Arica, subdirección de gestión asistencial PRAIS, emitido por doña Jeannette Valenzuela Navarrete, Psicóloga PRAIS, y Viviana Abarca González, Coordinadora PRAIS, respecto de Nelson Ramón Flores Pacheco, cédula de identidad N°10.737.511, informando que se encuentra ingresado como titular del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Arica, desde octubre del año 2013;

8.- Certificado N° 40, del Servicio de Salud Arica, subdirección de gestión asistencial PRAIS, emitido por doña Jeannette Valenzuela Navarrete, Psicóloga PRAIS, y Viviana Abarca González, Coordinadora PRAIS, respecto de don Leonardo Morales Morales, cédula de identidad N°4.874.630-6, certificando que se encuentra ingresado como titular del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Arica, desde septiembre del año 2005;

9.- Certificado N° 53, del Servicio de Salud Arica, subdirección de gestión asistencial PRAIS, emitido por doña Jeannette Valenzuela Navarrete, Psicóloga PRAIS, y Viviana Abarca González, Coordinadora PRAIS, respecto de don Waldo Catalán Barríos, cédula de identidad N°



Foja: 1

4.818.666-1, señalando que se encuentra ingresado como titular del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Arica, desde noviembre del año 2011.

**SÉPTIMO.-** Que, por su parte, el Fisco de Chile, en folio 46, aparejó al proceso oficio ORD N°6164/2019, emitido por el Instituto de Previsión Social, de fecha 17 de octubre de 2019, por el cual se informa un detalle de los beneficios otorgados a don Waldo Catalán Barrios, por una suma total a la fecha de emisión de **\$28.613.029**, y una Pensión actual Valech por la suma de \$201.635.-; a don Leonardo Morales Morales, por una suma total a la fecha de emisión de **\$28.179.687**, y una Pensión actual Valech por la suma de \$211.053.-; a don Hugo Eusebio García Castro, por una suma total a la fecha de emisión de **\$17.188.120**, y una Pensión actual Valech por la suma de \$184.407.-; a don Nelson Ramón Flores Pacheco, por una suma total a la fecha de emisión de **\$17.188.120**, y una Pensión actual Valech por la suma de \$184.407.-; y a don Jorge Calvo Herrera, por una suma total a la fecha de emisión de **\$32.471.267**, y una Pensión actual Valech por la suma de \$211.055.-.

**OCTAVO.-** Que, son hechos no controvertidos entre las partes, que los demandantes fueron víctimas de una detención ilegal y de torturas por agentes del Estado.

Asimismo, que los demandantes Waldo Catalán Berrios y Leonardo Morales Morales, forman parte de la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas” que elaboró la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, bajo el número 5.307 y número 15.753, respectivamente. Por su parte, el demandante Nelson Ramón Flores Pacheco, figura en la “Nómina de Prisioneros Políticos y Torturados”, bajo el número 3.104.

**NOVENO.-** Que, en consecuencia, lo litigioso lo constituye la procedencia de la indemnización reclamada por los demandantes, por concepto de daño moral.

**DÉCIMO.-** Que, previo a abordar el análisis del fondo de la controversia planteada en autos, corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de reparación integral, alegada por la demandada, por haber



Foja: 1

sido ya indemnizados los demandantes, fundándose en la prueba instrumental aparejada por el Fisco de Chile, que da cuenta de las reparaciones de los perjuicios sufridos por los actores efectuadas por diversos instrumentos (Pensión Ley N°19.992.- y Ley N°20.874) como así también menciona los actos de desagravio de carácter simbólico y los programas de reparación.

Al respecto, es un hecho evidente que el Estado de Chile cometió violaciones a los derechos humanos durante el período comprendido entre septiembre de 1973 a marzo de 1990, cuyas víctimas son beneficiarias de los mecanismos tendientes a su reparación establecidos en la Ley N°19.992.-, que instauró una pensión de reparación y otros beneficios a su favor, ampliada posteriormente por el aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, de la Ley N°20.874.-, y Ley N°19.234 de exonerados políticos, de lo que se concluye que el Estado de Chile, demandado en autos, ha reconocido en forma voluntaria y tácita, mediante la dictación de dichos cuerpos legales, su obligación de reparar el mal causado a las víctimas de la violencia estatal y sus familiares expresados tales leyes, cobrando, entonces, aplicación a su respecto la regla de onus probandi consagrada en el artículo 1698 del Código Civil, en el sentido que quien alega la extinción de una obligación, se encuentra en la necesidad de acreditar dicha circunstancia, y, siendo el pago alegado por el Fisco -ya que, desde un punto de vista sustantivo, esta es la finalidad de la “reparación integral” cuya existencia sostiene- un modo de extinguir las obligaciones, consagrado como tal en el artículo 1567 N° 1 del Código Civil, corresponde al Fisco probar la efectividad de encontrarse extinguida su obligación, sea a través del pago o de algún otro modo de extinguir las obligaciones, con el objeto de enervar la pretensión contraria.

Sin embargo, de la probanza incorporada legalmente al pleito, no se desprenden elementos de convicción que permitan establecer suficientemente la efectividad de haberse extinguido la obligación reparatoria en cuestión, en lo referido, particularmente, a los demandantes de este juicio.





Foja: 1

A mayor abundamiento, la mentada Ley N° 19.992.-, prescribió en su artículo 1°, lo siguiente: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo ‘Listado de prisioneros políticos y torturados’, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N°1.040, de 2003, del Ministerio del Interior”.*

Así también, se dispuso en el artículo 4° del mismo texto legal, que: *“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 2° de la presente ley, **la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario**, incluidas las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975.*

*Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.”*

**DÉCIMO PRIMERO.-** Que, asimismo, habrá que estar a lo expresado en el mensaje presidencial de dicha normativa (N°203-352), de fecha 10 de Diciembre de 2004, en el que se señaló lo siguiente: *“Y en este sentido, comparto las tres líneas de reparación que presenta la Comisión. En primer lugar dice que tienen que haber medidas institucionales, las cuales tienen que cristalizar en la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá, a través de la educación, el respeto a dichos derechos y a la vez se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información acumulada en Chile, desde los archivos de la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.*

*En segundo lugar, dice que tienen que haber medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo medidas jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones de esta terrible experiencia.*



Foja: 1

*Estas medidas, por cierto, y esto es muy importante, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas, pues ellas son instituciones permanentes de la República y pertenecen a todos los chilenos.*

***En tercer lugar, tienen que haber medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico.***

*Las jurídicas, básicamente se refieren a cómo restablecemos la honra de estas personas. La mayor parte de las veces fueron acusadas de delitos que nunca cometieron, y por tanto, el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos.*

***En el ámbito económico, lo he dicho antes, es imposible reparar daños físicos y espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas. Creo que sería una falta de respeto hacia las víctimas el que este valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión sobre dineros.***

***No obstante, considero que el Estado ya hizo un esfuerzo respecto de los familiares de los ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el exilio, respecto de quienes fueron exonerados de sus trabajos por razones políticas. Debe entonces ahora el Estado entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido.”***

**DÉCIMO SEGUNDO.-** Que, en ese mismo sentido, cabe estar al decreto supremo N°1040, publicado en el Diario Oficial de 11 de noviembre de 2003, que creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos en Chile”, de cuyo informe se proponen, entre otras, una serie de medidas divididas en tres categorías: aquellas individuales, dirigidas a las víctimas, que intentan reparar el daño ocasionado; las colectivas, de carácter simbólico, que tienen un mayor efecto sobre la percepción actual y futura de lo sucedido y del juicio social, que buscan garantizar que no se vuelvan a producir hechos de la gravedad que se han documentado; y aquellas referidas a la institucionalidad, para asegurar la puesta en práctica



Foja: 1

de las medidas, así como la vigencia de los derechos humanos en la convivencia futura de la nación.

**DÉCIMO TERCERO.-** Que, por su parte, la Ley N°20.874.-, en su artículo 1°, estableció que el aporte único entregado por esta normativa tiene el carácter de una reparación “parcial”.

**DÉCIMO CUARTO.-** Que, por lo demás, en dicho orden de ideas, uno de los requisitos del pago (que, como se dijo, es la finalidad a la cual se dirige sustancialmente la “reparación integral” alegada por la demandada), como modo de extinguir obligaciones, consiste en la integridad del mismo, exigencia que, en concepto de este Tribunal, no se cumple en la especie, en atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir a cada persona en especial, y, en comparación, los mecanismos e instrumentos legales de reparación invocados por la demandada no se ajustan a la norma internacional referida, la cual, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política de nuestra República, debe ser cumplida por el Estado de Chile, so pena de comprometer su responsabilidad internacional.

A mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha declarado, en un pleito análogo, que *“la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley”* (Considerando 13° de la sentencia dictada por el Máximo Tribunal el 29 de marzo de 2016, en el Rol N°2289-2015).



Foja: 1

**DÉCIMO QUINTO.-** Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado en los apartados precedentes, corresponderá desestimar la excepción de reparación integral, opuesta por la parte demandada.

**DÉCIMO SEXTO.-** Que, por otra parte, el Fisco de Chile alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las normas civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.



Foja: 1

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que *“... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraria la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5º de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito”* (Sentencia de Reemplazo ROL ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de las excepciones de prescripción enarboladas por la demandada.

**DÉCIMO SÉPTIMO.-** Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a las pretensiones de los actores, corresponde



Foja: 1

determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Que, los hechos sufridos por los demandantes conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención ilegal y apremios ilegítimos sufridos por estos, lo que fluye de los acontecimientos descritos y de la intervención de sus agentes en los referidos hechos, considerando en particular lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas que contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como del Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el derecho el Derecho Internacional Humanitario.

**DÉCIMO OCTAVO.-** Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor.

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.



Foja: 1

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

El daño moral consiste en la lesión a los intereses “extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88).

**DÉCIMO NOVENO.-** Que, atendido lo analizado, es dable concluir que en el caso de autos procede indefectiblemente la indemnización del daño moral reclamado, motivo por el que se dará lugar a la acción indemnizatoria solicitada respecto del daño moral sufrido por los actores, debiendo, en consecuencia, determinarse el quantum indemnizatorio, el que esta sentenciadora estima prudencialmente en **\$5.000.000.-**, para don Waldo Catalán Barrios y para don Nelson Flores Pacheco, y en la suma de **\$10.000.000.-**, para don Leonardo Morales Morales, lo anterior, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo en que cada uno se encontró privado de libertad, tanto que fueron reconocidos como víctimas del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, desprendiéndose con claridad que se les produjo un



Foja: 1

dolor grave, angustia, aflicción y natural temor y miedo, al momento de producirse los hechos y que innegablemente se han prolongado a lo largo de toda la vida de los actores.

**VIGÉSIMO.-** Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, las sumas reguladas se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses corrientes desde que el deudor quede en mora, esto es, desde que el fallo quede ejecutoriado.

**VIGÉSIMO PRIMERO.-** Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistrado que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 342, 346, 426, 427, 428 y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 1712, 2492 y 2518 del Código Civil; Ley N° 19.992; Ley N°20.874; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, y demás normas pertinentes, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y de prescripción deducidas por el **FISCO DE CHILE**;

II.- Que se acoge parcialmente la demanda y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile sólo en cuanto a pagar a favor de los demandantes **WALDO CATALÁN BARRIOS** y **NELSON FLORES PACHECO**, a título de daño moral, la suma total de **\$5.000.000.- (cinco millones de pesos)**, para cada uno de ellos, y, a favor del demandante **LEONARDO MORALES MORALES**, a título de daño moral, la suma





C-24650-2019

Foja: 1

total de **\$10.000.000.- (diez millones de pesos)**; más los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo precedente;

III.- Que se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelaré.

Rol N° C-24.650-2019.

**PRONUNCIADA POR DOÑA PATRICIA CASTRO PARDO,  
JUEZ TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, ocho de Marzo de dos mil veintitrés**

